



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veinte (2020)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2020-0262
PROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
CONVOCANTE: DAMARIS ISABEL CUESTA BERMUDEZ
CONVOCADO: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA
POLICÍA NACIONAL - CASUR

La Procuraduría 146 Judicial II para Asuntos Administrativos, celebró conciliación extrajudicial, entre **MARTHA ESPERANZA MENDEZ PEÑA**, en calidad de apoderada judicial de la convocante y **MARISOL VIVIANA USAMA HERNANDEZ**, en su condición de apoderada judicial de la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL - CASUR**, según acta No2020-119 (E-2020-301633) del 14 de septiembre de 2020, donde se decidió conciliar la actualización de las partidas computables de la asignación mensual de retiro denominadas subsidio de alimentación y doceavas partes de las primas de navidad, servicios y vacaciones conforme lo establecido en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, desde el 8 de agosto de 2016.

Por lo anterior y con el fin de cumplir la función encomendada al Juez Administrativo en el artículo 24 de la Ley 640 de 2001, es pertinente **AVOCAR Y DECIDIR LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL**, como sigue a continuación.

I. PARÁMETROS DEL ACUERDO CONCILIATORIO

- a.** La entidad convocada, propuso conciliar la inclusión de la actualización de las partidas computables de la asignación mensual de retiro denominadas subsidio de alimentación y doceavas partes de las primas de navidad, servicios y vacaciones devengados por la señora **DAMARIS ISABEL CUESTA BERMUDEZ**, por un monto total de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$5.428.478) MCTE.**
- b.** Se concilió el 75% de la indexación.
- c.** El reconocimiento del 100% de capital.
- d.** Las sumas dinerarias se cancelarán dentro de los 6 meses siguientes a la radicación de la cuenta de cobro con los documentos pertinentes en la entidad, tiempo en el cual no habrá lugar al pago de intereses.

- e. Se aplicará la prescripción trienal contemplada en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, por lo que la propuesta de conciliación se realiza desde el 8 de agosto de 2016, teniendo en cuenta que, la petición fue radicada ante la entidad el 8 de agosto de 2019.

La apoderada de la señora **DAMARIS ISABEL CUESTA BERMUDEZ**, manifestó estar de acuerdo con la oferta conciliatoria realizada por la entidad convocada, en su totalidad.

II. PRUEBAS

Como respaldo del acuerdo conciliatorio, se arribó al trámite los siguientes documentos:

- Solicitud de conciliación presentada por la abogada **Martha Esperanza Méndez Peña** ante la Procuraduría General de la Nación (fls.6 a 12).
- Poder especial otorgado por la convocante a la Dra. **Martha Esperanza Méndez Peña**, para actuar ante la Procuraduría General de la Nación. (fl.13)
- Hoja de Servicios de la convocante. (fl. 17)
- Resolución No. 2527 del 17 de abril de 2013 por medio de la cual reconoce una asignación de retiro en favor de la convocante. (fls.18 y 19)
- Liquidación de la asignación de retiro (fl.20).
- Copia del derecho de petición presentado por la apoderada judicial de la convocante ante el director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por medio del cual solicita el reajuste de la asignación de retiro por concepto de partidas computables. (fls.21 a 25).
- Copia de la respuesta a la petición radicada por la convocante. (fls. 28 a 29).
- Reporte histórico de bases y partidas de la señora **DAMARIS ISABEL CUESTA BERMUDEZ** (fls. 30-31).
- Constancia de envío solicitud conciliación extrajudicial a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fl. 32).
- Poder otorgado por la entidad convocada a la Doctora **Marisol Viviana Usama Hernández**. (fl. 88)

- Propuesta conciliatoria presentada por la entidad convocada a la Procuraduría General de la Nación. (fls. 98 a 99)
- Liquidación partidas computables. (fls. 100 a 102)
- Acta de conciliación extrajudicial celebrada ante la Procuraduría 146 Judicial II para Asuntos Administrativos de la Procuraduría General de la Nación, por la cual se suscribe acuerdo conciliatorio entre la apoderada de la señora **DAMARIS ISABEL CUESTA BERMUDEZ** y la apoderada de la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL** (fls.117 a 121).

Así las cosas, procede el Despacho a definir si aprueba o no la conciliación prejudicial, previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

El artículo 24 de la Ley 640 de 2001, enuncia que las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia contenciosa administrativa se remitirán dentro de los tres días siguientes al "*Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que le imparta su aprobación o improbación*".

Por su parte, mediante la expedición del Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, 1069 de 2015, reglamentario del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2009, se determinaron los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa y su artículo 2.2.4.3.1.1.2., estableció lo siguiente:

"Artículo 2.2.4.3.1.1.2. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control previstos en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1º. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:

- Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.
- Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.
- Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.

Parágrafo 2°. *El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.*

Parágrafo 3°. *Cuando el medio de control que eventualmente se llegare a interponer fuere la de nulidad y restablecimiento de derecho, la conciliación extrajudicial sólo tendrá lugar cuando no procedan recursos en vía gubernativa o cuando esta estuviere debidamente agotada, lo cual deberá acreditarse, en legal forma, ante el conciliador.*

Parágrafo 4°. *En el agotamiento del requisito de procedibilidad del medio de control de qué trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se entenderá incluida de repetición consagrada en el inciso tercero de dicho artículo.*

Parágrafo 5°. *El agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad, no será necesario para efectos de acudir ante tribunales de arbitramento encargados de resolver controversias derivadas de contratos estatales.”*

En este sentido, si bien es cierto que la conciliación prejudicial en materia administrativa es una de las vías más céleres y no litigiosas para la solución de conflictos, no es menos cierto que debe cumplir con las exigencias requeridas dentro del marco de la Constitución Política, las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1285 de 2009, para su consecuente aprobación.

Así, tenemos que los requisitos para la aprobación del acuerdo extrajudicial son los siguientes, tal como lo señaló la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia del 18 de julio de 2007, Rad .1998-00249-0 1(28106) con ponencia de la Doctora Ruth Stella Correa Palacio:

- “1. Que no haya operado el fenómeno de la caducidad (art. 61 ley 23 de 1991, modificado por el arto 81 ley 446 de 1998).*
- 2. Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (art. 59 ley 23 de 1991 y 70 ley 446 de 1998).*
- 3. Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar.*
- 4. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, **no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo** para el patrimonio público (art. 65 A ley 23 de 1991 y arto 73 ley 446 de 1998).”*

Dichos requisitos deben concurrir simultáneamente, porque al faltar uno de ellos, la conciliación debe ser improbada.

Acorde a los lineamientos expresados, el **DESPACHO APROBARÁ LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL** por los siguientes motivos:

1. No ha operado el fenómeno de la caducidad.

El asunto materia de conciliación es susceptible de reclamarse judicialmente a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), pues se trata del reajuste de la asignación de retiro, teniendo en cuenta para tal efecto, la inclusión de la actualización de las partidas

computables denominadas **subsidio de alimentación y doceavas partes de las primas de navidad, servicios y vacaciones.**

El Despacho precisa que la conciliación adelantada conforme los medios de prueba allegados al plenario, surte sus efectos para el reajuste de la asignación de retiro, por haberse omitido la actualización de las partidas computables denominadas **subsidio de alimentación y doceavas partes de las primas de navidad, servicios y vacaciones**, a partir del **8 de agosto de 2016**, por haberse presentado la solicitud de reconocimiento el **8 de agosto de 2019**.

La convocante tiene derecho al reajuste de la asignación mensual de retiro, debido a su vínculo laboral con la Policía Nacional y que no fueron ajustados conforme lo establece el artículo 42 del decreto 4433 de 2004.

Así las cosas, al no haberse actualizado los valores de la asignación mensual de retiro teniendo en cuenta las partidas computables denominadas **subsidio de alimentación y doceavas partes de las primas de navidad, servicios y vacaciones**, de la señora **DAMARIS ISABEL CUESTA BERMUDEZ**, es claro que el medio de control correspondiente no se encontraba caducado y respeta el criterio de prescripción en torno a los derechos laborales que de tres años contados a partir de que se hizo exigible el derecho a reclamar.

2. El acuerdo versa sobre derechos económicos disponibles.

Se observa que el reclamo se refiere de manera concreta al reajuste de la asignación de retiro, teniendo en cuenta para tal efecto, la inclusión de la actualización de las partidas computables denominadas subsidio de alimentación y doceavas partes de las primas de navidad, servicios y vacaciones, siendo un asunto que si bien constriñe derechos laborales ciertos e indiscutibles, son de connotación económica, por lo que son susceptibles de transacción bajo tales condiciones, máxime cuando de lo pretendido y del acuerdo se verifica que la convocante tiene derecho a la prestación reclamada, pues así se desprende de la formula conciliatoria presentada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

3. Las partes están debidamente representadas.

La parte convocante actúa mediante apoderada con facultades para conciliar, conforme al poder visible a folio 12 del expediente.

De igual manera, la entidad convocada actúa a través de apoderada judicial tal y como se puede observar a folio 88 del plenario.

4. El acuerdo no viola la ley, cuenta con las pruebas necesarias y no afecta el patrimonio público.

Pues bien, la señora **DAMARIS ISABEL CUESTA BERMUDEZ**, según se desprende de la información allegada a la actuación reclamó ante la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL**, el reconocimiento y pago de las diferencias dejadas de percibir en su asignación mensual de retiro, resultantes de la aplicación del principio de oscilación de las partidas denominadas **subsidio de alimentación y doceavas partes de las primas de navidad, servicios y vacaciones**, emolumentos percibidos por la convocante.

Por medio de los Decretos 1212 y 1213 de 1990, se reformó el estatuto de personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional; contemplando, entre otros aspectos, lo relativo a las asignaciones, primas, subsidios, pasajes, viáticos y demás emolumentos a que tenía derecho este tipo de personal.

En vigencia de la Constitución Política de 1991, el artículo 218 estableció que el régimen de carrera, prestacional y disciplinario de la Policía Nacional sería determinado por la ley; en virtud de lo cual, se expidió, entre otras normas, la Ley 4ª de 1992, mediante la cual se fijaron las normas, objetivos y criterios que debía observar el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional, entre otros, de la Fuerza Pública.

La Ley 4ª de 1992, en su artículo 10º, determinó que todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en ella o, en los decretos que dictara el Gobierno Nacional en desarrollo de esta, carecería de todo efecto y no crearía derechos adquiridos.

Respecto a las prestaciones por retiro del personal uniformado de la Fuerza Pública, el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, determinó que el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, tendría derecho, a partir de la fecha de culminación de los tres meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de retiro de la Policía Nacional, se le pague una asignación mensual de retiro equivalente a un 75% del monto de las partidas computables enumeradas en el artículo 49 de ese estatuto, por los primeros veinte años de servicio y un dos por ciento más, por cada año que exceda de los primeros veinte, sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento de tales partidas.

Esta norma fue declarada nula por el Consejo de Estado mediante sentencia del 14 de febrero de 2007, radicado interno 1240-04, con ponencia del Magistrado Alberto Arango Mantilla y años más tarde, con la expedición de la Ley 923 de 2004, se definieron las normas, objetivos y criterios para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, entre otros, el mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro y de las pensiones legalmente reconocidas.

En el numeral 3.13 de su artículo 3º, la Ley 923 de 2004, determinó que al establecer el régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional debía tener en cuenta, entre otros elementos mínimos, el incremento de esas

prestaciones en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo.

Posteriormente, en desarrollo de la Ley 923 de 2004, se expidió el Decreto 4433 de 2004¹, que estableció el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.

El artículo 42 del Decreto 4433, al igual que los regímenes anteriores, refrendó el sistema de incremento pos-oscilación, al determinar que las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en dicho decreto, se incrementarían en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado.

Así las cosas, observa el Despacho con las pruebas aportadas al plenario que en los años 2015 a 2020, las partidas computables liquidadas dentro de la asignación de retiro de la convocante lo fueron en los siguientes valores²:

Partida computable	2015	2016	2017	2018
Sueldo básico mensual	\$2.217.464	\$2.389.761	\$2.551.070	\$2.680.919
P. de retorno a la experiencia	\$166.309.80	\$179.232.08	\$191.330.25	\$201.068.93
P. de navidad (1/12)	\$230.387.59	\$230.387.59	\$230.387.59	\$230.387.59
p. de servicios (1/12)	\$90.881.16	\$90.881.16	\$90.881.16	\$90.881.16
P. de vacaciones (1/12)	\$94.667.87	\$94.667.87	\$94.667.87	\$94.667.87
Subsidio de alimentación	\$42.144	\$42.144	\$42.144	\$42.144

Mediante escrito radicado el 8 de agosto de 2019, ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, la parte actora solicitó el reajuste de las partidas computables incorporadas dentro de su asignación de retiro, conforme al sistema de oscilación (ff. 21 a 25).

En respuesta a dicho pedimento, el Director General de Casur, mediante oficio No. 201921000267051 del 26 de septiembre de 2019, indica que, la entidad se encuentra adelantando las mesas de trabajo en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para establecer las acciones pertinentes que conduzcan al reconocimiento y pago de dichas partidas (fls. 28 y 29).

Para resolver lo pertinente en primer lugar, debe recordarse que el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, que constituye una reproducción literal de lo señalado al respecto en los elementos mínimos señalados por la Ley Marco 923 de 2004; establece que las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas

¹ Por medio del cual se fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.

² Folios 26 y 27 del expediente.

en ese decreto, se incrementarían en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado.

La literalidad de la norma no deja lugar a duda respecto a que, el porcentaje en que anualmente se incremente la asignación salarial del personal activo de la Fuerza Pública en sus distintos grados jerárquicos, está constituida por el sueldo básico mensual, servirá de referencia para el incremento de las asignaciones de retiro y pensiones de esta categoría de servidores públicos; mención a la luz de la cual debe entenderse que el porcentaje de reajuste de la asignación salarial, debe aplicarse al monto total de la prestación pensional o de retiro, más no a algunos de sus factores de liquidación y exceptuando a otros de dicha variación.

Pese a la claridad de esta premisa legal, del análisis del material probatorio allegado al expediente se logró establecer que el extremo demandado no ha venido aplicando la norma en su sentido literal, pues tal como lo sostuvo la parte convocante, las cuantías de las partidas correspondientes a prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones y subsidio de alimentación, según lo certificado por la misma parte pasiva en las documentales visibles en los folios 100 a 103 del plenario, han permanecidos inmutables desde el año 2013 y hasta el 2018.

Ahora bien, en una sana hermenéutica del artículo 42 del Decreto reglamentario 4433 de 2004, el porcentaje de incremento anual de las asignaciones en actividad, aplicado a su vez al monto total de la prestación de retiro, necesariamente debe redundar en el acrecentamiento del valor de las partidas con que aquella se liquida, tal como se infiere de lo probado en el expediente, en el cual quedó demostrado que las cuantías del sueldo básico mensual y la prima de retorno a la experiencia, sí presentaron una variación entre los años 2013 al 2018.

Así las cosas, el método de reajuste empleado por la parte convocada, sobre la asignación mensual de retiro de la señora **Cuesta Bermúdez**, que vale decir, no corresponde a ninguno de los señalados en la ley y reconocidos por la jurisprudencia para el personal uniformado de la Fuerza Pública, ha originado que dicha ciudadana actualmente se encuentre percibiendo una mesada devaluada en términos nominales, no acorde con el postulado de mantenimiento de poder adquisitivo que pregonan la misma Constitución Política en su artículo 58, y en todo caso, haciendo que con ello, el sistema de oscilación contemplado en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, y bajo el cual la entidad convocada se encuentra de acuerdo, teniendo en cuenta la respuesta ofrecida a la convocante mediante **oficio No. 201921000267051 del 26 de septiembre de 2019**, y su ánimo conciliatorio dentro del presente proceso.

5. Orden de conciliar por parte del Comité de Conciliación.

Según se observa a folios 98 y 99 del expediente, que el comité de conciliación de la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA**

NACIONAL - CASUR, decidió conciliar el presente asunto, a favor de la señora **DAMARIS ISABEL CUESTA BERMUDEZ**, por la suma de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$5.428.478) MCTE**.

Así las cosas, frente a las partidas liquidadas, se tiene que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional Casur, incluyó dentro de las partidas liquidables de la asignación de retiro las siguientes: **i)** asignación básica, **ii)** prima de retorno a la experiencia, **iii)** duodécima parte de la prima de servicio, **iv)** duodécima parte de la prima de vacaciones, **iv)** duodécima parte de la prima de navidad y **v)** subsidio de alimentación; los anteriores factores liquidados con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.

En consecuencia, el porcentaje de reconocimiento, así como las partidas liquidadas por la entidad, encuentran pleno respaldo jurídico y probatorio, circunstancia por la cual se impone aprobar la conciliación judicial presentada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional Casur y que fue aceptada en su totalidad por la señora **Damaris Isabel Cuesta Bermúdez**.

Conforme a ello, se observa que, en la liquidación efectuada por la entidad, en efecto se reconoce los valores adeudados por concepto de asignación de retiro, en el porcentaje y partidas establecidas en la Ley que se causaron en el periodo comprendido entre el **8 de agosto de 2016 al 14 de septiembre de 2020**³.

Así las cosas, se tiene que el acuerdo no es lesivo a los intereses y el patrimonio de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional Casur, toda vez que se concilió por el valor adeudado a la convocante por concepto del derecho al reajuste de la asignación de retiro teniendo en cuenta para el efecto, las partidas computables; lo anterior, al tenor de lo dispuesto en el artículo 42 del decreto 4433 de 2004.

De igual manera, la prescripción trienal a la cual se hace alusión en las actas del comité de conciliación también es viable, en tanto ha sido reconocida por el Consejo de Estado⁴, habida cuenta que, dicho termino cumple con los parámetros de eficacia normativa, y ha sido considerado valido por el Máximo Tribunal Constitucional⁵.

Es así como en la providencia emitida por el Consejo de Estado, referida en el párrafo anterior, señaló que: *“el primer inciso del artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, que previó un término de prescripción trienal para las asignaciones y pensiones previstas en dicha norma, no fue expedido con vulneración del*

³ Folio 107 del expediente.

⁴ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA Consejero Ponente: Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, diez (10) octubre de dos mil diecinueve (2019).

⁵ (...) i) No vulnera los principios, los criterios, los objetivos o los mínimos previstos en la Ley 923 de 2004; ii) atiende los principios y fines esenciales del Estado; iii) permite la realización material de los derechos sustanciales que el régimen pensional y de asignación de retiro consagrado; iv) no vulnera derechos fundamentales de los miembros de la Fuerza Pública; v) la medida tiene un fin legítimo y constitucionalmente válido, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-072 de 1994, vi) no se observa que la misma desborde los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

numeral 11 del artículo 189 ni del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, por haber incurrido en exceso del ejercicio de la potestad reglamentaria al desarrollar la Ley 923 de 2004”.

Luego entonces, al haberse presentado la petición de lo aquí reclamado ante la entidad el **8 de agosto de 2019**, quiere decir ello que de conformidad con el artículo **43 del decreto 4433 de 2004**, se ha configurado el fenómeno jurídico de la prescripción **trienal**, por lo que el derecho a gozar de la prestación aquí conciliada se efectuará desde el **8 de agosto de 2016**.

En relación con el plazo para efectuar el pago se determinó que el mismo se realizaría dentro de los seis (6) meses siguientes a la radicación de la cuenta de cobro y la incorporación de la integridad de los documentos necesarios para tal fin, tiempo en el cual no habrá lugar a pago de intereses.

Lo anteriormente expuesto permite a ésta Jurisdicción, conforme a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 65A de la Ley 23 de 1991, aprobar la conciliación extrajudicial suscrita ante la Procuraduría 146 Judicial II para Asuntos Administrativos el día 14 de septiembre de 2020, por la abogada **Martha Esperanza Méndez Peña**, quien actuó en representación de la convocante **Damaris Isabel Cuesta Bermúdez**, y la abogada **Marisol Viviana Usama Hernández** en calidad de apoderada de la **Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional**, en razón a que el acuerdo conciliatorio se fundó en un objeto y causa lícitos, sin vicios en el consentimiento de las partes, y sin que con él se lesionen los intereses del Estado, o afecte el patrimonio económico del ente público en lo que fue materia de conciliación, pues se trata de un reajuste pensional del cual es titular la convocante.

En virtud de lo expresado, el **JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA**,

R E S U E L V E:

PRIMERO: APROBAR LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL de calenda 14 de septiembre de 2020, suscrita entre **MARTHA ESPERANZA MÉNDEZ PEÑA**, quien actúa en representación de la señora **DAMARIS ISABEL CUESTA BERMÚDEZ** y **MARISOL VIVIANA USAMA HERNÁNDEZ**, quien actúa en representación de la entidad convocada **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL**, celebrada en la Procuraduría 146 Judicial II para Asuntos Administrativos.

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en los numerales 2º y 3º del artículo 114 del Código General del Proceso, aplicable a esta jurisdicción por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo., y por expresa orden del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Enrique Gil

Botero, en providencia de 25 de junio de 2014, expediente 2012-00395 (IJ), la Secretaría expedirá copia de este proveído con sus respectivos anexos, la cual prestará merito ejecutivo en los términos del art. 2.2.4.3.1.1.13., del Decreto Único 1069 de 2015.

Para tal efecto, la parte interesada deberá consignar el valor de la certificación que asciende a la suma de **SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$6.800)** en la cuenta del Arancel Judicial de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial No. 3-0820-000636-3 del Banco Agrario de Colombia.

TERCERO: Se ordena por secretaría, se realice el desglose de los folios 73 a 86 del expediente digital, teniendo en cuenta que, los documentos que allí reposan, pertenecen al expediente radicado No. 2020-122 (E-2020-305826) del 12 de junio de 2020, convocante: Fiduprevisora – Convocado: Universidad Nacional de Colombia y remítase de manera oportuna a la Procuraduría 146 Judicial II para Asuntos Administrativos, para lo de su competencia, dejando para tal efecto, la constancia del caso.

CUARTO: Una vez cumplido lo ordenado en el numeral anterior archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

20

Firmado Por:
**ANDRES JOSE
GNECCO
JUEZ
JUZGADO 026**



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes la providencia anterior hoy **11 DE NOVIEMBRE DE 2020**, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)



**LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA**

**QUINTERO
CIRCUITO**

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6545091fc41e0f16e445c9a7187c79337841430fbe947b9a41dd0a9e1923cecb**
Documento generado en 10/11/2020 03:40:50 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>